

Miguel Antonio Espinosa Rico.

Geógrafo, profesor y decano (e) de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima.
Grupo de Estudios Urbanos y Regionales, GEURB.

Ecuador y Bolivia: El retorno presente de los conflictos por las autonomías regionales y el trasfondo de las luchas por el poder real

Resumen

El artículo analiza cómo la población, como efectivo demográfico que representa un peso específico, puede llegar a jugar un papel clave en las disputas regionales que desde hace décadas se libran al interior de los Estados nacionales de Ecuador y Bolivia. Allí, como lo hemos visto para el caso colombiano, se alude siempre a la población como variable a tener en cuenta para determinar ciertos asuntos, como la asignación de recursos del presupuesto nacional a las entidades territoriales, o para determinar rangos de jerarquías urbanas, entre otros. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el peso real que la población, con sus múltiples y no siempre valoradas variables intrínsecas, tiene en tales procesos?, sobre todo cuando se trata de conflictos que tienen una profunda connotación étnica.

Palabras claves: Ecuador, Bolivia, demografía, conflicto, territorio, región.



Abstract

This paper analyzes how the population - as demographic effect representing a specific weight - can play a key role in those regional fights that have been fought inside the national states of Ecuador and Bolivia for decades. Over there, as we have seen it in Colombia, population is always referred to as a variable to be considered in order to solve certain issues, such as the allocation of money from the government budget to territorial entities, or to establish urban ranks, among others. But the question remaining is: what is the real weight that population, with their various and underestimated intrinsic variables, has in such processes?, mainly when it comes to conflicts with a profound ethnic connotation.

Key words: Ecuador, Bolivia, demography, conflict, territory, region.

Introducción

La población, como "objeto de trabajo" de la demografía y de la geografía de la población, constituye con bastante frecuencia un referente obligado cuando de hablar

de políticas públicas se trata. Después de la efervescencia que sobre ella se creó en las décadas de la llamada explosión demográfica, por cierto muy largas en los países del Tercer Mundo, una vez ganado el terreno de la aclamada transición demográfica, que para el caso de Colombia empezaría a ser evidente a partir de los años 70 del Siglo XX, se la abandonó y casi o muy poco se la volvió a mencionar.

Sin embargo, con los procesos de imposición del modelo neoliberal en todos los países dependientes y del capitalismo periférico y del Primer y Segundo Mundo, la alusión a la población y a las dinámicas demográficas retornó, justamente como respuesta a la evidencia de profundas transformaciones en la estructura socio espacial del mundo y al papel que en aquella juega la población.

La preocupación anterior del control natal y el poblamiento situado, o dirigido estatalmente, parece haber cumplido su ciclo y ahora, en esta primera década del Siglo XXI emergen nuevas preocupaciones en torno a las dinámicas poblacionales. Con relativa facilidad se pasa de los estudios dominantes sobre los procesos migra-



torios rural-urbanos, urbano-urbano de escala nacional a los estudios de las migraciones internacionales, amén de estudios sobre variables demográficas en función del impacto de políticas oficiales de salud, casi todas. Ese es el panorama que en particular se ha identificado de la producción hecha al amparo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, pero también de autores académicos con Bangüero y Castellar (de la Universidad del Valle), o de Ramiro Cardona, para citar solo algunos, además de los estudios de carácter institucional adelantados por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, en el caso de Colombia.

Tal parece también que ha sido el proceso en otros países de Latinoamérica y, de manera particular en Ecuador y Bolivia, escogidos por interés académico personal para el presente escrito.

La idea no es realizar un análisis de la estructura de la población, ni siquiera de algunas variables asociadas, como por ejemplo el empleo. Se trata de analizar en cambio cómo la población, como efectivo demográfico que representa un peso

específico, puede llegar a jugar un papel clave en las disputas regionales que desde hace décadas se libran al interior de los Estados nacionales de Ecuador y Bolivia. Allí, como lo hemos visto para el caso colombiano, se alude siempre a la población como variable a tener en cuenta para determinar ciertos asuntos, como la asignación de recursos del presupuesto nacional a las entidades territoriales, o para determinar rangos de jerarquías urbanas, entre otros, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el peso real que la población, con sus múltiples y no siempre valoradas variables intrínsecas, tiene en tales procesos?

Muy seguramente la respuesta no resulte tan inmediata, pero sin duda no es posible asistir a un evento o disputa del poder real sin considerar los efectivos electorales o de "bulto" poblacional que se esgrimen a la hora de las negociaciones, esas sí reales entre las élites regionales de todos los países, sin excepción.

El contexto latinoamericano y el contexto global

Algunos aspectos claves que caracterizan el contexto global y latinoamericano deben



ser tenidos en cuenta a la hora de abordar el análisis de procesos políticos que ocurren al interior de los Estados nacionales y que para el presente ensayo centran su atención en la creciente tensión entre las élites de las regiones y los gobiernos centrales.

Las dos últimas décadas de la vida política de Latinoamérica han estado marcadas por el "... desdibujamiento del Estado-Nacional, limitado cada vez más, a funcionar como un aparato burocrático reducido pero eficiente para administrar la inserción y desenvolvimiento de las economías nacionales en el espectro de la economía global; y de otro lado, la revitalización de las identidades locales regionales, étnicas, de los territorios subnacionales, y por tanto el surgimiento de actores que pugnan por nuevas formas de reconocimiento y representación políticas, de redistribución del poder, de los capitales y de la riqueza nacional. El contexto es la apertura externa empujada por la globalización económica y financiera y los cambios en las bases institucionales de la política y la economía nacionales" (Ramírez, 2000:2).

Pero además, esta función del Estado Na-

cional como facilitador de los procesos de acumulación de capital, en el período de aplicación exacerbada del modelo neoliberal, esgrime como herramientas puestas a su favor los mecanismos que la seudodemocracia neoliberal, expresa en todas las constituciones neoliberales de la década de los 90 (presuntamente desmontadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador): la participación ciudadana y la apertura económica y una parafernalia creciente de propuestas instrumentales para disfrazar la ofensiva de estrategias de soluciones espacio temporales (Harvey, 2000; 2007; 2009) con que el capital desesperadamente busca salir de su última y prolongada crisis. Así por ejemplo, acude a la engañosa y atractiva propuesta de democratización de la gestión estatal mediante la formulación de "políticas públicas" en cada vez más sectores y aspectos de la vida de la sociedad, con lo que de paso pretende el ocultamiento de las mismas como la más palmaria muestra de la debilidad de la estructura estatal y la crisis de gobernabilidad; acude al expediente de la participación ciudadana, refiriendo ésta a una parodia demagógica de la cual en ningún caso conocido se ha derivado decisión que refleje las propuestas que "desde abajo" han sido for-



muladas por las organizaciones sociales u organizaciones de base. El cuadro general de la participación ciudadana, en el caso colombiano, es el de una en la que quienes participan no toman lugar en las decisiones, pero con cuya presencia en las reuniones convocadas se "legitima" burdamente el proceso.

De esta manera, las demandas legítimas de la ciudadanía por un nuevo marco de relacionamiento entre las diferentes escalas espaciales de la función territorial del Estado y entre los gobiernos y los ciudadanos, se ve trastocada por una práctica política que la utiliza para construir soluciones políticas legitimadoras de regímenes excluyentes y autoritarios, los cuales, por supuesto, se explican por la crisis a la que llegaron las democracias dependientes y representativas que serían reemplazadas por las democracias participativas del modelo neoliberal.

En el mismo escenario global, mientras los países de la alianza hegemónica se deshacen en argumentos para justificar el desmonte de los Estados Nacionales de los países bajo su dominación, para liberarse de la incómoda presencia y ejercicio de las soberanías y autodetermi-

nación nacional y sus marcos legales, se encierran cada día más en sus fronteras nacionales y se reservan el derecho de intervenir en los territorios de los Estados dependientes. De tal tamaño es el descaño con que actúa el imperialismo en materia de política internacional.

La muestra más palmaria de este comportamiento está en la activa presencia atribuida a los intereses imperialistas en los sucesos que produjeron la "caída del muro de Berlín" y el derrumbamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS; pero también la desintegración de la ex Yugoslavia y el estímulo a las luchas independentistas del Tíbet chino, todo esto solamente en las últimas dos décadas. Muy al contrario, y rabiamente, han actuado con respecto a los anhelos independentistas del Quebec en Canadá, la padania italiana o el territorio vasco en España.

El ensayo se propone auscultar, en el marco de la problemática regional contemporánea, el peso específico que la dimensión demográfica puede llegar a jugar en el escenario de los conflictos intranacionales entre las regiones y los poderes centralistas en Ecuador y Bolivia.



Un recorrido por el proceso de transformación socio espacial en el Ecuador

Carrión (1986), asocia el proceso de urbanización como un "fenómeno típicamente capitalista" cuyas expresiones en Ecuador se hacen claramente manifiestas a partir de la segunda mitad del Siglo XIX, con la consolidación del Estado Nacional, el predominio de relaciones de producción capitalistas, el desarrollo de una economía agroexportadora, la consecuente articulación del mercado interno y de éste con el mercado externo, apoyado todo ello en un desarrollo importante de la infraestructura vial, centrada en las carreteras y el ferrocarril. Sin embargo Carrión señala que si bien la urbanización es un fenómeno inherente al modo de producción capitalista, éste no está dominado por la relación industrialización/urbanización, lo que otorga al proceso de urbanización de los países periféricos sus propias particularidades. En otros términos, si bien la ciudad es una condición necesaria para la presencia industrial -ello no quiere decir que la segunda actúe como causa de la primera-, no resulta mecánicamente así en el caso ecuatoriano, que en términos similares se

ha planteado para el proceso de urbanización colombiano (Espinosa, 1992).

Según Liliana de Riz (1986:31), hasta 1950 solo existían en Ecuador 104 centros poblados de 2.000 y más habitantes, de los cuales solo 2 sobrepasaban los 100.000 habitantes; 2 más se situaban entre 50.000 y 99.999 habitantes; y solo 3 entre 20.000 y 49.999 habitantes. En 1962 el panorama había cambiado ya de manera significativa, pues aunque Quito y Guayaquil se mantenían como las únicas ciudades con más de 100.000 habitantes, aparecerían 2 en la escala de 50.000 a 99.999 y de 3 se pasaría a 8 ciudades con población entre 20.000 y 49.999 habitantes.

En el mismo período la población urbana en estos centros creció de aproximadamente 1.100.000 habitantes en 1950 a 1.700.000 habitantes en 1962 y las dos ciudades principales pasaron de contener el 46% en 1950 al 51%, respectivamente, lo que indica que el crecimiento urbano corrió por cuenta de las ciudades intermedias y pequeñas, que incluyen a aquellas con poblaciones de menos de 2.000 habitantes.

En el conjunto del país, la población urbana total pasó de 3.203.000 habitantes en 1950

**Cuadro 1.** Distribución de la población ecuatoriana por regiones 1950-1962

REGIONES	1950		1962	
	POBLACIÓN	%	POBLACIÓN	%
Total nacional	3.202.757	100.0	4.476.007	100.0
Sierra	1.856.445	58.0	2.271.345	51.7
Costa	1.298.495	40.5	2.127.358	46.6
Oriente	46.471	1.5	74.913	1.6
Archipiélago Colón	1.346	0.04	2.391	0.05

Fuente: De Liz (1986).

a 4.581.000 habitantes en 1962, registrando un crecimiento del 43%. Quito y Guayaquil pasaron de representar el 14.6% de la población urbana total ecuatoriana en 1950 a 18.9% en 1962

En el análisis de las tasas de crecimiento presentadas por las principales ciudades entre 1950 y 1962, la autora muestra que en todos los casos éstas fueron superiores en las ciudades costeras, así por ejemplo, Guayaquil registró una tasa de crecimiento del 5.8% frente al 4.5% de Quito; Esmeraldas creció en un 8% y Portoviejo en un 5.8%, respectivamente, superando a Ibarra, Cuenca y Riobamba, ciudades serranas del interior (ver cuadro 1).

De las cifras se observa que mientras el crecimiento poblacional serrano fue de ape-

nas 1.7% anual, este comportamiento fue del 4.2% anual para la costa y del 4.05% para el oriente de la frontera andino-amazónica. El crecimiento demográfico diferencial, pero en todo caso favorable a las áreas costeras y del oriente ecuatoriano va mostrando una rápida tendencia al equilibrio entre sierra y costa, como se verá en el cuadro 2.

Cuadro 2. Ecuador. Porcentaje de población según región 1780-1982

AÑO	SIERRA	COSTA
1780	91.2	8.8
1892	74.4	19.0
1938	61.3	32.0
1941	60.6	34.9
1950	68.0	40.5
1962	51.7	46.6

Fuente: De Liz, 1986.



Carrón (1986), quien realiza un estudio sobre el proceso de urbanización para el período intercensal 1962-1974, muestra que la sierra registró un crecimiento del 2.8%, frente a 3.5% de la costa y 7.2% del oriente, si bien el crecimiento urbano disminuyó levemente, al pasar de 4.8% en 1959-1962 a 4.5% en 1962-1974. En contraste, la población rural pasó de una tasa de 1.9% en el primer período analizado a 2.5% en el segundo, lo cual se explica por la ampliación de la frontera agrícola, particularmente en provincias del oriente y la costa, dedicadas a la producción comercial tecnificada.

El mismo autor realiza un análisis de la estructura de empleo para las principales ciudades ecuatorianas, mostrando la existencia de un relativo equilibrio entre Quito, Guayaquil y Cuenca.

Quito registraba un 17.71% del empleo industrial, frente al 23.25% para Cuenca y el 15.83% para Guayaquil; Quito registra un 15.17% de ocupación en actividades del comercio frente a 15.20% para Cuenca y 22.83% para Guayaquil; en servicios Quito y Guayaquil tenían un 38% de ocupación en Servicios frente a 31% en Guayaquil.

Larrea (1986), quien realiza el estudio del proceso de urbanización ecuatoriano del periodo 1974-1982, muestra el avance ya inexorable del poblamiento sobre las áreas costeras y del oriente del país, con lo que se definirá prácticamente la estructura urbana regional del Ecuador actual. El cuadro 3 muestra estas cifras.

Es claro que ya para 1982 la población asentada en territorios costeros es en un 50% mayor que la serrana, configurando además un espacio caracterizado por una densa red de centros urbanos que se extienden de sur a norte de la costa pacífica ecuatoriana.

Con respecto a la población rural el cuadro 4 muestra la transformación profunda que ha experimentado el Ecuador durante las tres décadas analizadas.

En la costa, mientras la población rural duplicaba a la población urbana en 1950, ya para 1982 la población urbana excedía a la primera en una proporción del 25%; en la Sierra la proporción era de 2.5 a favor de la población rural y desciende apenas a un 25% en 1982. A nivel nacional la proporción a favor del sector rural era similar al de la Sierra, pero en 1982 esta

**Cuadro 3.** Ecuador. Población urbana censos 1950-1962-1974

REGIÓN	CIUDAD	1950	1962	1974	1982
SIERRA	Quito	209.932	354.746	599.828	866.472
	Cuenca	39.983	60.402	104.470	152.406
	Ámbato	31.312	53.372	77.955	100.454
	Riobamba	29.830	41.625	58.087	75.456
	Loja	15.399	26.785	47.697	71.652
	Ibarra	14.031	25.835	41.335	53.428
	Tulcán	10.623	16.448	24.398	30.985
	Latacunga	10.389	14.856	21.921	28.764
	Otavalo	8.425	8.830	13.605	17.469
	Azogues	6.588	8.075	10.953	14.648
	Sangolquí	3.179	5.501	10.554	15.004
	Kayambe	7.409	8.101	11.199	14.249
	Guaranda	7.299	9.900	11.364	13.685
	Atutánquí	4.630	8.759	9.907	12.247
	San Gabriel	6.269	6.803	10.036	11.213
	Cañar	4.415	4.935	6.727	10.534
	Macará	3.330	5.027	8.063	10.510
	Total Sierra		413.043	659.800	1'066.099
COSTA	Guayaquil	258.966	510.004	823.219	1'199.344
	Machala	7.549	29.036	69.170	105.521
	Portoviejo	16.330	32.228	59.550	102.628
	Manta	19.028	33.622	64.519	100.338
	Esmeraldas	13.169	33.403	60.364	90.360
	Milagro	13.736	28.148	53.106	77.010
	Santo Domingo	1.493	6.951	30.523	69.236
	Quevedo	4.168	20.602	43.101	67.023
	Bebahoyo	9.181	16.444	28.914	42.266
	Chone	8.046	12.832	23.627	33.839
	Santa Rosa	4.776	8.936	19.696	26.716
Jipijape	7.711	13.367	19.996	27.148	
Pasaje	5.021	13.215	20.790	26.224	



REGIÓN	CIUDAD	1950	1962	1974	1982
COSTA	Huaquillas			9.164	20.117
	Daule	4.501	7.428	13.170	18.923
	Balsar	2.920	6.588	10.924	17.627
	Salinas	2.672	5.460	12.409	17.748
	Empalme			11.828	17.017
	Ventanas	1.584	3.686	8.977	15.869
	Vinces	3.748	6.901	10.126	14.608
	Santa Elene	2.775	4.241	7.687	12.859
	Bahía	9.316	8.845	11.258	12.360
	El Carmen			7.196	11.928
	Quinindé	497	1.662	4.847	10.658
Naranjito	3.597	5.632	6.204	10.523	
Total Costa		400.832	809.030	1'430.365	2'147.887
TOTAL NAL		813.875	1'468.830	2'498.464	3'646.962

Fuente: Larrea (1986)

Cuadro 4. Ecuador. Población urbana y rural censos 1950-1962-1974-1982

REGIÓN	1950	1962	1974	1982
Urbana Costa	425.879	871.435	1'501.114	2'268.531
Rural Costa	874.109	1'262.874	1'708.855	1'747.505
Urbana Sierra	483.962	737.436	1'172.273	1'637.787
Rural Sierra	1'370.970	1'617.419	1'943.769	2'094.817
Rural Oriente	42.253	66.878	152.171	207.872
Urbana Nacional	915.415	1'619.297	2'698.712	3'968.362
Rural Nacional	2'287.331	2'947.171	3'821.988	4'093.350
Total Costa	1'299.988	2'134.309	3'209.969	4'016.036
Total Sierra	1'854.952	2'354.855	3'116.042	3'732.604
Total O. Gal.	47.817	77.304	177.506	269.916
Total Nacional	3'202.757	4'566.468	6'511.710	8'060.712

Fuente: Larrea (1986)



proporción era favorable a la población urbana en apenas un 2%, mostrando un momento de equilibrio.

La población total en las provincias costeras era ya superior a la serrana en un 8% y representaba el 50% de la población total del país.

En todos los registros referidos por Larrea, las tasas de crecimiento urbano anual de las zonas costeras en el período 1972-1982, es superior a las serranas, siendo particularmente fuertes en ciudades como Machala (8.59%), Santo Domingo (12.74%), Esmeraldas (6.2%) y Portoviejo (5.91%). En el conjunto nacional, las tasas de crecimiento para la Costa fueron del 5.4% anual frente a solo 2.12% para la Sierra. El total nacional creció en 2.92% anual durante el período.

Carrión (1986b), concluye que "La "evolución del espacio urbano ecuatoriano" nos muestra desde sus orígenes que su sustento principal ha sido, paradójicamente, las transformaciones acaecidas en una diferencial estructura agrario-regional, mediada por los ciclos respectivos (auge-crisis) que introduce una economía dependiente del comercio exterior. De

allí que las distintas fases de que se componen los dos períodos fundamentales estuvieran relacionadas con las fluctuaciones del crecimiento económico del país".

La conformación urbana del primer período se funda en los procesos de conquista-colonia, en el que la organización foránea se impuso sobre la nativa convirtiendo a las ciudades en mecanismos eficientes de control y dominación, pero al mismo tiempo en reflejo de un proceso simultáneo de poblamiento/despoblamiento, que iría a marcar los orígenes de la red urbana nacional de los siglos posteriores; si bien la integración del territorio nacional no se daría todavía, debido fundamentalmente a la dispersión de los centros urbanos y la consecuente fragmentación regional-provincial, encabezada por la ciudad primada, Quito.

Este período mostró tres momentos: el primero, relacionado por el dominio de la producción minera que comandó al mismo tiempo la fundación de ciudades; la segunda, basada en la producción de algodón y textiles acompañada de una intensa producción agropecuaria basada en la hacienda serrana, con un claro letargo



del proceso de urbanización; y la tercera, derivada del movimiento independentista que ratificó el papel ordenador de la capital primada pero que articuló la Costa de plantaciones al desarrollo nacional, con lo que se consolidaron las funciones de las principales ciudades y se abre un periodo de transición en la transformación rural-urbana.

Al llegar al segundo gran período, o propiamente de urbanización, se hace clara la constitución de un cuadro de bicefalia urbana, que alterará de manera definitiva la estructura urbana del país, dice el autor, en detrimento de las ciudades intermedias y pequeñas. Pero este momento va a estar asociado a la implantación de un modelo agroexportador que va acompañado primero por la integración del mercado nacional y seguidamente la articulación de las regiones serrana y costera, comandadas cada una por sus respectivas capitales y sus particulares ventajas productivas.

A este segundo período lo caracterizan también tres momentos: el primero está muy asociado a la plantación cacaotera en apogeo en las tierras cálidas de la Costa, que contrasta con el estancamiento de la

hacienda serrana y que va a generar flujos migratorios desde la Sierra hacia la Costa; el segundo momento estará determinado por la apertura de la producción de plantación bananera en la Costa, mientras la Sierra no se repone de su crisis agraria a pesar de intentos de modernización, lo que generará flujos rural-urbanos de migración hacia las ciudades costeras; y un tercer momento, determinado por el desarrollo incipiente de la industria y los ingresos derivados de la economía petrolera, que provocará una migración de características interurbanas, que por supuesto favorece más a las ciudades costeras que a las ciudades de oriente, que no logran deshacerse de su condición de enclave, quedándose rezagadas así de la posibilidad de articularse a la "red urbana" nacional.

Dice al autor que "es interesante remarcar que el desarrollo alcanzado por las ciudades en las fases correspondientes a la producción predominantemente hacendaria y de plantación, estuviera sustentado por la consolidación de formas productivas principalmente rurales; lo cual comporta, paradójicamente, que la urbanización de las ciudades haya estado acompañada por "ruralización" de la



economía, contrariamente a la fase industrial-petrolera, que es inducida por la distribución del auge petrolero vía gasto público y concentración industrial en las ciudades que históricamente fueron formando y concentrando las condiciones generales de la producción: Quito y Guayaquil, preponderantemente".

Finalmente se prevé que la tendencia hacia la concentración de la economía en Quito y Guayaquil consolidará un cuadro de bicefalía urbana, que resulta particular para el caso ecuatoriano.

Como en todo Latinoamérica andina, las áreas de montaña generaron desde siempre el sustento alimentario, la minería, la producción pecuaria y la producción textil que circuló y circula aún por todo el país, mientras sobre las áreas costeras se estableció un régimen hacendario que pasó de la tala de las selvas húmedas ecuatoriales a la ganadería y las plantaciones de caña de azúcar, plátano (banano), arroz, principalmente. La amazonia ecuatoriana, como la colombiana y la boliviana, se ha mantenido relativamente al margen de las dinámicas económicas nacionales e internacionales, quizá gracias a su posición de marginalidad espacial,

aunque es en ellas que se ha sustentado el desarrollo de la extracción petrolera, la cual en Ecuador tiene aún características de enclave típico.

Si bien las tierras serranas tienen ciudades de importancia histórica indiscutible, las tierras costeras constituyen los escenarios más adecuados a las dinámicas globalizadoras, expresadas en una creciente tendencia hacia la concentración de actividades maquiladoras, desarrollo portuario, aeroportuario y nuevos renglones de la actividad económica orientados al comercio global-aunque el origen de las materias primas incluso esté en las áreas amazónica y serrana-

Guayaquil, Portoviejo y Santo Domingo, polarizarán todo el corredor costero ecuatoriano, controlando de manera dominante los flujos de importaciones y exportaciones, con lo que incluso las viejas oligarquías dedicadas a los sectores agropecuarios y del comercio, han virado y continúan haciéndolo, hacia los circuitos de la nueva acumulación capitalista, centrada en la extracción de riquezas naturales, producción de biocombustibles, sector financiero, telecomunicaciones y servicios (con un crecimiento fuerte del turismo).



Así que contemplamos no solamente una confrontación con fuertes soportes en la base económica regional que busca corresponderse con una salida política que le sea funcional sino un escenario que por esta vía parece ocultar una pugna con tintes étnicos, pues se trata también de dos espacios claramente diferenciados, entre, por una lado, la población indígena, de ancestros quichuas, concentrada en la sierra y, por otro lado, la población mestiza, dominante en las tierras costeras.

La evidencia de los intereses en disputa en la cuestión nacional ecuatoriana

Hemos planteado que existe una diferencia de fondo aún no analizada y menos comprendida, entre los intereses de los pueblos indígenas y la población mestiza, liderada ésta última por las oligarquías provinciales. Y planteamos ahora que una vía para ponerlo al descubierto, además de la implicación misma de la propuesta de la reestructuración del Estado Nación burgués para llevarlo a Estado Multiétnico y Pluricultural -como plantea el movimiento indígena- o un Estado Nación Regional o Federal, como plan-

tean las oligarquías provinciales y los movimientos sociales provinciales, es la consideración de la composición étnica.

En primer lugar, el proceso histórico de poblamiento en la actual República del Ecuador, muestra que sobre los Andes, pero con mayor intensidad en los altiplanos, se localizaron los pueblos nativos del gran pueblo Quichua y Awa, mientras que sobre la llanura amazónica se asentaron los pueblos nativos A T Cofán, Siona-Secoya, Huarorani y Shuar-Achuar. Sobre la costa Pacífica el poblamiento, con los pueblos Chachi y Tsáchila fue siempre disperso.

Sobre los altiplanos centrales y con posterioridad a la conquista y colonia española se produjo, como en toda la América andina, un intenso proceso de mestizaje, mientras que sobre las tierras costeras se producía un menos intenso proceso de asentamientos con base en la población esclavizada africana, que incluye también a la provincia interandina norteña del Carchi, donde se dio una intensa actividad agroindustrial con base en el cultivo de caña de azúcar y su procesamiento orientado básicamente al mercado nacional.



El programa de regionalización de las provincias propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), órgano central de planificación del gobierno de la República del Ecuador, ha generado rechazo y reacciones entre las administraciones de los diferentes estados subnacionales, como se desprende de varios documentos ¹ de prensa de esta nación que trae reacciones y desacuerdos.

Pese a que los "voceros de la SENPLADES manifestaron que las sedes fueron elegidas a través de estudios en los que se consideraron diferentes variables como **ubicación geográfica, población y peso de las actividades económicas** de la región", los líderes de las administraciones actuales alcaldes y prefectos de diversas regiones y provincias reclaman airadamente determinadas ciudades como capitales político-administrativas-regionales. Aunque la SENPLADES aclaró que no propone nuevas capitales sino "sedes administrativas de las regiones descentralizadas". "La principal objeción es la

determinación de la SENPLADES de fijar "a dedo" el nombre de las siete sedes administrativas, como son los casos: Región 1 a Ibarra, Región 2 a Tena, Región 3 a Ambato, Región 4 a Ciudad Alfaró, en Montecristi, Manabí, región 5 a Milagro, Región 6 que no está definida, y Región 7 a Loja", señala la fuente consultada y citada a pie de página.

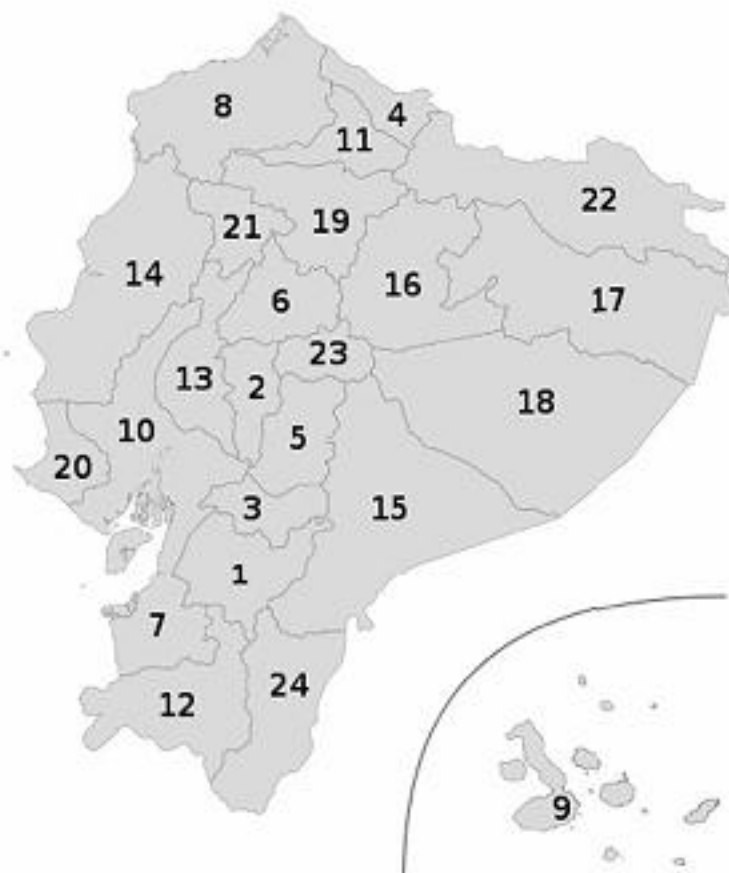
Además, las autoridades de las regiones 6 y 7 proponen la unificación de éstas en una sola región y se discute si su capital, en vez de ser Loja, como propone SENPLADES, sea Machala, una ciudad de mayor tamaño y dinámica económica en el centro sur del país.

El otro caso con respecto a la ciudad se presenta en Manabí, pues mientras SENPLADES propone a Montecristi, sectores de la región consideran que la capital debe estar situada en Portoviejo, ciudad histórica en la región. El mapa de regionalización estatal propuesto en la ilustración 1.

¹ <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/polemica-por-regionalizacion-propuesta-por-el-senplades-349201.html>



Ilustración 1. Mapa de regionalización del Estado ecuatoriano





REGIÓN	NO.	PROVINCIAS	CAPITAL
1	4	Carchi	Tulcán
	8	Esmeraldas	Esmeraldas
	11	Imbabura	Ibarra*
	22	Sucumbíos	Nueva Loja
2	16	Napo	Tena*
	17	Orellana	Pto. Francisco de Orellana
	19	Pichincha	Quito
3	5	Chimborazo	Riobamba*
	6	Cotopaxi	Latacunga
	18	Pastaza	Puyo
	23	Tungurahua	Ambato
4	9	Galápagos	Puerto Baquerizo Moreno
	14	Manabí	Portoviejo
	21	Sto Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo
5**	2	Bolívar	Guaranda
	10	Guayas	Guayaquil
	13	Los Ríos	Babahoyo
	20	Santa Elena	Santa Elena
6	1	Azuay	Cuenca*
	3	Cañar	Azogues
	15	Morona Santiago	Macas
7	7	El Oro	Machala
	12	Loja	Loja*
	24	Zamora Chinchipe	Zamora

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador>

Uno de los primeros en mostrar su desacuerdo con esta definición de la SENPLADES

fue el alcalde de Machala, Carlos Falquez. "No estoy de acuerdo con que la capital de la Región 7 sea la ciudad de Loja. Debe ser Machala", aseguró. Falquez ha mostrado su inconformidad sobre el proyecto de regionalización en el que está empeñado el actual Régimen, indicando que esto no traerá resultados positivos para el país. "Hay que fomentar la unidad de los ecuatorianos en otro sentido, sin tratar de crear subregiones que vendrán a ser perjudiciales para el desarrollo del Ecuador... No es que esté contra los hermanos lojanos, lo que pasa es que Machala debe ser la capital administrativa de la Región 7".

El prefecto electo de El Oro, Montgómery Sánchez, plantea una regionalización autónoma del sur con El Oro, Loja, Azuay, Cañar, Morona y Zamora, cuyos prefectos ya lo han aceptado, pero espera la decisión de la consulta popular.

En Santa Elena, el prefecto electo, Patricio Cisneros no apoyará la conformación de una región con Guayas, Bolívar y Los Ríos. "Queremos nuestro desarrollo independiente, sin necesidad de integrar regiones como las que plantea la SENPLADES.



En Manabí, el columnista de El Diario, Chilerico Cevallos, criticó a la SENPLADES diciendo "que escogió a Montecristi menospreciando el potencial político-administrativo de Portoviejo como capital". (AM)

Tomando en consideración la dimensión demográfica por regiones y provincias propuestas por SENPLADES, la siguiente sería la composición resultante (ver cuadro 5).

Como se observa, las provincias 2 y 5, donde se localizan las ciudades de Quito, capital de la república, y Guayaquil, respectivamente, concentran el 18.89% y 33.20% de la población total del país, ambas suman el 52% y se mantienen en su categoría de distritos metropolitanos. También es evidente que las provincias de menor población son las que se localizan sobre la franja oriental del país, en la amazonia ecuatoriana, mientras los mayores centros urbanos se encuentran en la sierra andina y el corredor costero.

Un cuadro más detallado sobre la composición demográfica por provincias, que incluye además grupos de edad, se muestra en el cuadro 6.

En los más recientes conflictos políticos internos vividos en Ecuador, particularmente a partir de mediados de la década de los 90 del Siglo XX, las élites de la región de Guayas, lideradas por Guayaquil, la mayor ciudad del país, ha expresado propósitos secesionistas, amenazando con convocar a las regiones que históricamente han reclamado por el abandono del gobierno central. En una hipotética alianza política de estas regiones, fundamentalmente las regiones 4, 5, 6 y 7, de la propuesta SENPLADES, éstas representarían el 61.3% de la población total del país y las mayores ciudades ecuatorianas: Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, Portoviejo y Santo Domingo. No se puede perder de vista que uno de los mayores varones electorales ecuatorianos y además ex presidente de la república, Novoa, controla económica y políticamente la provincia de El Oro, de la propuesta región 7.

Ramírez (2000), rastrea la problemática regional en Ecuador, situando los comienzos de la década de los 90 como referente temporal, alrededor de un complejo panorama de "explosión de identidades sociales" cuya orientación tiene que ver no solo con demandas por su reconocimien-

**Cuadro 5.** Ecuador. Regiones y provincias según la propuesta de SENPLADES. 2009

ESTADO/CAPITAL	PROVINCIA	POBLACIÓN		%
1 IBARRA	Sucumbíos	173 461	1268370	9.06
	Carchi	169 877		
	Imbabura	414 451		
	Esmeraldas	510 581		
2 TENA	Orellana	117 896	2646146	18.89
	Napo	100 747		
	Pichincha	2 427 503		
3 AMBATO	Pastaza	79 740	1471133	10.50
	Tunguragua	520 014		
	Cotopaxi	416 167		
	Chimborazo	455 212		
4 MONTECRISTI	Santo Domingo	331 126	1703419	12.17
	Manabí	1 348 430		
	Galápagos	23 863		
5 MILAGRO	Bolívar	183 193	4650721	33.20
	Los Ríos	768 207		
	Guayas	3 432 447		
	Santa Elena	266 874		
6*	Morona Santiago	135 297	1069819	7.64
	Cañar	231 528		
	Azuay	702 994		
7* LOJA	El Oro	631 679	1161353	8.29
	Loja	442 011		
	Zamora Chinchipe	87 663		
ÁREAS NO DEL.		34 488	34488	0.25
TOTAL		14 005 449	14005449	100.00

*La Propuesta de Montgomery Sánchez, Prefecto de El Oro, es que los Estados 6 y 7 constituyan una sola unidad político-administrativa.



Cuadro 6. Ecuador 2009. Proyecciones de población total por regiones de planificación según sexo y grupos quinquenales de edad.

EDADES	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	GUAYAQUIL	GALAPAGOS	AREAS NO D	PAIS
0-4	139 781	63 316	153 527	181 345	249 590	119 992	122 466	190 026	205 051	4 439	1 431 904
5-9	142 738	61 510	162 592	180 143	243 781	119 464	125 657	191 463	206 272	4 216	1 439 908
10-14	142 809	57 279	160 956	182 485	239 847	121 817	126 416	191 551	204 827	3 984	1 433 856
15-19	124 422	53 260	145 535	165 165	225 972	115 426	117 007	205 203	207 211	3 391	1 365 207
20-24	109 144	50 233	124 039	150 956	217 201	93 191	97 871	213 696	227 551	2 374	1 289 140
25-29	99 542	44 929	110 633	137 483	200 024	78 300	88 570	198 513	208 365	2 663	1 171 812
30-34	89 687	37 796	98 132	124 194	179 149	68 386	81 035	173 425	189 198	2 509	1 046 039
35-39	80 777	32 818	88 997	107 742	157 827	60 940	74 341	155 596	170 338	2 212	933 724
40-44	69 907	27 653	79 036	95 089	138 876	55 095	66 592	139 039	153 962	1 685	828 714
45-49	60 266	23 054	71 432	83 405	119 304	48 213	58 151	116 779	130 046	1 221	713 368
50-54	51 979	19 205	65 350	71 364	104 444	44 688	51 100	96 110	102 746	940	609 201
55-59	44 757	15 965	58 093	56 910	86 422	40 521	43 466	77 903	81 068	737	506 872
60-64	33 602	11 714	45 208	42 926	63 491	30 851	32 669	53 075	55 218	494	370 066
65-69	27 345	8 796	36 788	33 740	49 745	24 185	26 578	41 380	46 027	343	295 531
70-74	20 771	6 654	29 437	26 317	38 991	19 889	20 140	33 460	36 492	236	232 861
75-79	15 316	4 979	22 519	19 611	27 773	14 900	14 911	23 910	26 506	199	170 927
80 y +	15 527	4 392	18 859	20 680	29 547	13 961	14 383	21 463	26 978	189	166 319
Total	1 268 370	523 552	1 471 133	1 679 556	2 371 983	1 069 819	1 161 353	2 122 594	2 278 738	23 864	14 005 449

Región 1: Esmeraldas (incluye La Concordia), Carchi, Imbabura y Sucumbíos;

Región 2: Napo, Pichincha y Orellana;

Región 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo;

Región 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas;

Región 5: Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar;

Región 6: Azuay, Cañar y Morona Santiago;

Región 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe;

Áreas no delimitadas (Manga del Cura, El Piedrero y Las Golondrinas).

Fuente: INE. República del Ecuador, 2009.



to sino con el cuestionamiento del centralismo estatal. En este sentido confluyen en el escenario las demandas indígenas que anteponen al Estado centralista, monoétnico y monocultural, un Estado multiétnico y pluricultural, por un lado, y por otro lado, las demandas de la sociedad mestiza que reclaman una efectiva descentralización del poder real del Estado, por la vía de la federalización o la regionalización.

Así, identidades étnicas e identidades locales, provinciales y regionales conforman el cuadro de las demandas por autonomías en el Ecuador. Sin embargo, estas autonomías deben comprenderse en forma diferencial sustantiva. Por un lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, reclama "autonomía y autogobierno de los pueblos indios en específicas circunscripciones territoriales", lo cual obliga una redefinición profunda de la teoría, concepto y estructura del Estado Nación, en tanto ya no se trata simplemente del Estado Nación como "Estado social de derecho" bajo los principios del derecho funcional al modelo neoliberal sino del Estado Multiétnico y Pluricultural, que supone una estructura en la que el gobierno sur-

ge de las legitimidades derivadas de las nacionalidades que conforman el Estado, es decir, un nuevo Estado en el que la negociación del poder ocurre entre gobiernos con autonomías y jurisdicciones territoriales socialmente legitimadas.

Este último aspecto, que no ha sido aún comprendido en el debate latinoamericano sobre el Estado Nación, debe ser puesto de relieve a la hora de asumir el análisis de los conflictos regionales al interior del Ecuador, pero sobre todo, para advertir el peligro que representa confundir los intereses levantados por el movimiento indígena (¿y quizá más adelante por el movimiento afroecuatoriano?) y los que, desde una perspectiva más pragmática de lucha por el poder, levantan las oligarquías provinciales del sur y la costa.

De esta manera, el hecho de que "las autoridades de cinco provincias del país han efectuado incluso sendas consultas populares para avalar, a nivel de la ciudadanía, tal reforma política, en todas ellas la población se ha mostrado ampliamente favorable a la implantación de un régimen de autonomías provinciales" (Ramírez, 2000:2) que debe situarse en la



perspectiva de que, aunque justa de autonomía regional, levantan sectores dominantes regionales.

Y por supuesto, ello no niega

"La eclosión de la diversidad, movimiento paralelo y reactivo al de la globalización (cfr. Rosenau, 1995), es un hecho y aparece como una suerte de revancha de la particularidad ante un 'centro' mal habido y disfuncional que, a nivel del estado, redundando en lo que Gellner (1994) calificara como divorcio entre el sistema político: la diversidad cultural de la sociedad civil.

El repunte de movimientos étnicos: regionales no debe verse, entonces, como un proceso aislado sino como una respuesta a los mismos procesos estructurales que se suceden a nivel global (cfr. Giddens, 1999:44). Lo mismo cabe decir con

res-

pecto a las formulaciones institucionales -autonomía, descentralización, federalización, estados-regionales- o políticas -separatismos o movimientos secesionistas- que se desprenden de estas reivindicaciones. Las filiaciones identitarias, trayectorias de identificación o mecanismos de producción de lealtades locales no se desintegran, por el contrario, aparecen como marca distintiva del nuevo mapa global. Así, en el

caso ecuatoriano, la consolidación del Estado nacional y de las narrativas dominantes sobre las identidades nacionales ha sido desbordada, principalmente, por cuestionamientos derivados en clivajes étnicos y regionales. Las imágenes de una identidad nacional sólidamente suturada, homogénea, estable y vinculante se desdibujan, en el transcurso de la última década, en favor de un mapa identitario fracturado, poroso, y heterogéneo. Las dislocaciones descritas ponen en juego la idea del carácter construido de las identidades, de su fragilidad, y de sus usos estratégicos (Mouffe, 1996). Pero más allá de eso, evidencian que las relaciones entre territorio, población y cultura no son predecibles, unívocas o simétricas (Radcliffe/Wesrwood, 1999); dan más bien la imagen de una superposición variable, maleabilidad radicalizada con la globalización, que impide un 'ensamblaje' estable entre los imaginarios nacionalistas y las estructuras institucionales que los soportan" (Ramírez, 2000:2-3).

Acertadamente Ramírez descifra en el conflicto regional ecuatoriano tres procesos políticos, históricos y sociales, referidos el primero, al proceso más reciente de tareas inconclusas de reestructuración del Estado Nación por la vía de las refor-



mas neoliberales que imponen la modernización y la democratización, que se ha caracterizado por la "discontinuidad en las políticas públicas", más la recurrencia del déficit fiscal y la apelación a sucesivos programas de ajuste", que ante las igualmente recurrentes protestas sociales, han obligado al gobierno a mantener "modalidades desarrollistas de intervención", sin que ello le resuelva la ausencia histórica en la capacidad de respuesta ante las necesidades sociales y económicas de la sociedad, como lo pretendía la reestructuración impuesta por el modelo neoliberal.

El segundo proceso, asociado al primero, está relacionado "con la pertinaz crisis económica y social que el Ecuador ha experimentado en las dos últimas décadas en el contexto de un proceso de abandono del modelo estado-céntrico de desarrollo y de instauración de un programa de liberalización y ajuste". Como en los demás casos estudiados, el centro de la vida política nacional se centró en la economía, bajo los enfoques del control y gobernabilidad que sobre ella ejercen variables macroeconómicas de la órbita global, en cuyos vaivenes las economías nacionales se han movido entre momen-

tos de "crecimiento" y cada vez más acentuadas depresiones; si bien el autor cita fuentes oficiales que arguyen que se presentaron "pésimos rendimientos de los sectores productivos y financieros", acompañados por "el deterioro sistemático de la calidad de vida de más del 70 por ciento de la población y la exacerbación de las desigualdades sociales".

El tercer y último proceso está relacionado con el conflicto fronterizo vivido entre Ecuador y Perú, que concluyó finalmente con la firma de un "acuerdo de paz en octubre de 1988". Este conflicto que llevaba años acumulando tensión, concluía así con una reafirmación, por la vía de este acuerdo, de una crisis de identidad nacional a ambos lados de la frontera internacional.

El proceso de reconstrucción de las identidades étnicas y regionales transcurre así en el marco del -reacomodo de las bases institucionales de la política y la economía nacionales al contexto global, y de la obsolescencia de los filtros convencionales de segregación de pertenencia nacional; se trata de un movimiento que cuestiona tanto a las imágenes de cohesión e integración nacional como al aparato estatal que las pro-



mueve. La interacción incesante entre los movimientos de globalización y localización se hace evidente: el proceso de 'retorno' a lo local, a las micro-identidades, forma parte de y ha sido propiciado por la misma dinámica social del sistema capitalista, en su fase de acumulación flexible global. El capitalismo históricamente ha conseguido desplegarse a través y por medio de una serie de marcos culturales, políticos y sociales diversos y densamente acotados. No los pulverizará, ni busca su supresión en el tiempo, por el contrario, existe una suerte de reconocimiento y absorción de tales diferencias con miras a ampliar el espacio de mercantilización y acumulación capitalistas (cfr., Hall, 1997). Los flujos globales, entonces, dan forma y moldean el espacio de constitución de 'lo local, 'presionan' hacia abajo creando nuevas demandas y nuevas posibilidades de regeneración de identidades locales (Ramírez, 2000:4)

Es en este marco que irrumpen las propuestas de Bucarán, Gutiérrez y Correa, las dos primeras derrotadas por la beligerancia de los movimientos sociales en los que se unificaron indígenas, campesinos, sectores populares urbanos y afroecuatorianos, además de sectores de clases medias. Correa llegó al poder prometien-

do un nuevo contrato, no solo social sino de relaciones entre el gobierno central y los poderes regionales, a sabiendas de la fuerte oposición de las élites de Guayaquil, Manabí y el oriente.

En su complicado juego hacia la resolución de un conflicto de gobernabilidad de ámbito nacional, Correa logró situar en un segundo plano el debate por las autonomías regionales, aplazándolo para un segundo momento, tal como en efecto lo planteó a través de la propuesta de regionalización de SENPLADES que ya hemos analizado.

En este periplo el gobierno ecuatoriano ha contado con elementos del conflicto internacional, particularmente el ocurrido en las relaciones con Colombia por la intromisión de las FARC y la salida de las tropas estadounidenses de la base de Manta, lo cual le ha permitido rehacer en cierta forma otro episodio de ratificación de los valores y el patriotismo nacional, tal como ya lo habíamos visto en el caso del conflicto con el Perú.

Pese al peso específico de la población que las élites de las provincias por autonomías regionales pueden movilizar, el



gobierno de Correa, más que sus antecesores, ha logrado consolidar un consenso alrededor sus necesidades reales, a las cuales llega a través de políticas sociales de choque y de negociaciones escalonadas con los diferentes movimientos sociales: ya con el movimiento obrero, ya con el movimiento indígena reunido en la Confederación Indígena Nacional del Ecuador, CONAIE, ya con los movimientos de los "forajidos", o populares y clases medias urbanas que lo llevaron al poder, ya con la iglesia, ya con sectores de las élites de Guayaquil, Cuenca y Manabí, en fin, parece tener claro que el control del poder real está fuertemente atado al mantenimiento de la "unidad nacional" bajo un régimen republicano que propone bajo una organización regional dirigida, no por los autonomistas sino por el Estado Nacional ecuatoriano, con sede en Quito.

Bolivia y la exacerbación del etnicismo anti indigenista

Bolivia expresa la mayor acumulación de tensiones interétnicas de toda Latinoamérica, pues contiene no solo la mayor proporción de población indígena sino el hecho de haber colocado, por primera

vez en la historia continental, al primer presidente indígena.

A diferencia de lo que usualmente se registra en los medios, esta confrontación no es asunto del presente, y menos de la llegada de Evo Morales al palacio presidencial. Estudios relacionados con el caso boliviano, muestran que la llegada de éste al poder constituye el corolario de un proceso de acumulación de fuerzas de un proyecto étnico político que ha venido avanzando durante al menos las dos últimas décadas.

La población boliviana se estimaba en 2006 en 9.627.269 y para 2009 en 10.027.643 (INE, 2009)².

El 60% de la población está constituida por pueblos amerindios de ancestro incaico, quechua y aymara, aunque también tienen presencia importante los pueblos guaraníes y mojeños.

... los primeros viven principalmente en el occidente del país, en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca

² http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Bolivialibre



y Cochabamba y los segundinos viven en el oriente del país, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

La población mestiza constituye apenas el 27.5% de la población nacional y está dispersa por todo el país. Según esta misma fuente y aunque no puede derivarse a priori el carácter étnico de este comportamiento, pero las más altas concentraciones de población inmigrante -europea- se asienta justamente en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Ellos son austriacos, alemanes, italianos, croatas, rusos, ingleses e irlandeses, de entre los cuales sobresale una comunidad religiosa menonita conformada por una población de aproximadamente 40.000 personas.

Grupos inmigrantes menores, como los españoles, franceses y portugueses "...se encuentran repartidos por casi todo el país". La minoría étnica afroboliviana, conformada por aproximadamente 25.000 personas se ha asentado en las provincias Nor y Sud, en los Yungas, departamento de La Paz. Otro grupo de inmigrantes, aún no precisado en su magnitud por la fuente, conformado por japoneses, chinos, coreanos, libaneses, judíos y turcos, se asentaron en las provincias del oriente boliviano

y tienen según la fuente "muchísima influencia económica". El mapa siguiente (ilustración 3) muestra la localización de los departamentos bolivianos actuales y la posición extrema de los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

Ilustración 3. Mapa de Bolivia



Fuente: http://www.comunidadandina.org/quienes/map_bol.htm



Seguidamente se muestra el cuadro 7 con las 20 principales ciudades y los departamentos respectivos a los cuales pertenecen, incorporando la población estimada para 2007.

Por considerar de valor central, se muestra ahora (cuadro 8) la composición étnica para la república de Bolivia, con lo cual se ratifica la esencia nativa del proceso político que este país está viviendo y el peso que esta población ha recuperado en su derecho a la conducción del país.

Cuadro 8. Bolivia. Autoidentificación con pueblos originarios o indígenas de la Población de 15 años o más

ÉTNIA		6%	6ACUMULADO
CHUQUISACA			
QUECHUA	188587	61.03	61.03
AYMARA	3878	1.26	62.29
GUARANI	7957	2.58	64.86
CHIQUITANO	394	0.13	64.99
MOJEÑO	285	0.09	65.08
OTRO-NATIVO	1280	0.41	65.50
NINGUNO	106611	34.50	100.00
Total	308992	100.00	100.00
LA PAZ			
QUECHUA	117729	7.82	7.82
AYMARA	1028105	68.33	76.15
GUARANI	3931	0.26	76.41

ÉTNIA		6%	6ACUMULADO
CHIQUITANO	1306	0.09	76.50
MOJEÑO	1558	0.10	76.60
OTRO-NATIVO	11198	0.74	77.35
NINGUNO	340868	22.65	100.00
Total	1504695	100.00	100.00
AREA # COCHABAMBA			
QUECHUA	596506	66.11	66.11
AYMARA	62843	6.96	73.07
GUARANI	3038	0.34	73.41
CHIQUITANO	1537	0.17	73.58
MOJEÑO	1854	0.21	73.78
OTRO-NATIVO	4486	0.50	74.28
NINGUNO	232072	25.72	100.00
Total	902336	100.00	100.00
AREA # ORURO			
QUECHUA	89762	35.68	35.68
AYMARA	94121	37.41	73.08
GUARANI	291	0.12	73.20
CHIQUITANO	108	0.04	73.24
MOJEÑO	64	0.03	73.27
OTRO-NATIVO	1578	0.63	73.90
NINGUNO	65680	26.10	100.00
Total	251604	100.00	100.00
AREA # POTOSÍ			
QUECHUA	320490	77.00	77.00
AYMARA	26316	6.32	83.32
GUARANI	337	0.08	83.40
CHIQUITANO	136	0.03	83.44
MOJEÑO	49	0.01	83.45
OTRO-NATIVO	1155	0.28	83.72
NINGUNO	67742	16.28	100.00
Total	416225	100.00	100.00



ÉTNIA		6%	6ACUMULADO
AREA #	TARIJA	-	-
QUECHUA	29978	12.46	12.46
AYMARA	6391	2.66	15.12
GUARANI	6603	2.75	17.87
CHIQUITANO	551	0.23	18.10
MOJEÑO	172	0.07	18.17
OTRO-NATIVO	3611	1.50	19.67
NINGUNO	193200	80.33	100.00
Total	240506	100.00	100.00
AREA #	SANTA CRUZ	-	6
QUECHUA	206564	16.95	16.95
AYMARA	48071	3.94	20.89
GUARANI	55072	4.52	25.41
CHIQUITANO	107152	8.79	34.20
MOJEÑO	13223	1.08	35.28
OTRO-NATIVO	26320	2.16	37.44
NINGUNO	762528	62.56	100.00
Total	1218930	100.00	100.00
AREA #	BENI	-	-
QUECHUA	6835	3.38	3.38
AYMARA	7282	3.60	6.97
GUARANI	1065	0.53	7.50
CHIQUITANO	1007	0.50	8.00
MOJEÑO	25723	12.71	20.70
OTRO-NATIVO	24331	12.02	32.72
NINGUNO	136220	67.28	100.00
Total	202463	100.00	100.00
AREA #	PANDO	-	-
QUECHUA	1238	4.06	4.06
AYMARA	1620	5.31	9.37
GUARANI	144	0.47	9.84
CHIQUITANO	80	0.26	10.10
MOJEÑO	395	1.30	11.40
OTRO-NATIVO	1468	4.81	16.21
NINGUNO	25555	83.79	100.00
Total	30500	100.00	100.00

ÉTNIA		6%	6ACUMULADO
RESUMEN	-	-	-
QUECHUA	1557689	30.69	30.69
AYMARA	1278627	25.19	55.87
GUARANI	78438	1.55	57.42
CHIQUITANO	112271	2.21	59.63
MOJEÑO	43323	0.85	60.48
OTRO-NATIVO	75427	1.49	61.97
NINGUNO	1930476	38.03	100.00
Total	5076251	100.00	100.00

Procesado con Redatam+G4. La Paz - Bolivia 2003.

Es clarísimo que los departamentos más abiertamente opuestos al gobierno indigenista y popular de Morales sean justamente aquellos donde se concentra el 27.5% de la población no indígena del país, es decir, Santa Cruz, Tarija, Beni y El Pando.

Sin embargo, resulta claro también que dichos departamentos contienen el 30% de la población total del país, lo cual los coloca en una situación muy difícil ante un proyecto étnico nacionalista que logre unificar al 70% de la población para avanzar en la consolidación del primer Estado Indígena del Mundo. El cuadro 9 muestra la población por departamentos y capitales de Bolivia.

**Cuadro 9.** Bolivia. División política y población por departamentos.

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN	SUPERFICIE 8KM²7	DENSIDAD 8*7	CAPITAL 8HAB.7
República de Bolivia	9.627.269	1.098.581	8,8	Sucre
6Beni	414.758	213.564	1,9	Trinidad (86.385)
6Chuquisaca	611.660	51.524	11,9	Sucre (247.259)
6Cochabamba	1.709.806	55.631	22,7	Cochabamba (586.813)
6La Paz	2.872.793	133.985	19,9	La Paz (835.000)
6Oruro	437.131	53.558	8,2	Oruro (216.620)
6Pando	69.541	63.827	1,1	Cobija (32.217)
6Potosí	772.578	118.218	6,5	Potosí (149.246)
6Santa Cruz	2.367.440	370.621	6,6	Santa Cruz de la Sierra (1.397.000)
6Tarija	471.563	37.623	12,5	Tarija (170.906)

(*)= Todos los datos de población son proyecciones del INE para 2006 [2]. La densidad departamental está calculada con la proyección de la población de 2006. Otras ciudades importantes son (por departamento): La Paz: *El Alto* 827.000, *Viacha* 75.021, Cochabamba: *Quillacollo* 90.000 *Sacaba* 127.000, Tarija: *Yacuiba* 90.000, Santa Cruz: *Montero* 90.000, *Warnes* 47.000, Beni: *Riberalta* 78.000, *Guayamerín* 44.663, Potosí: *Puna* 40.945 (*censo 1992*), *Tupiza* 23.100.

La urbanización boliviana: un caso particular de "indigenización de la ciudad"

Así como se lee justamente. Al punto que los estudiosos del fenómeno urbano boliviano no parecen captar la importancia excepcional del hecho y realizan sus lecturas sin advertirlo. Sin duda llama poderosamente la atención que un país con un 70% de su población indígena observe un proceso tan traumático que no logra, al menos hasta ahora, deshacer la autoidentificación étnica de la población

que soporta las dinámicas demográficas que se traducen en un proceso de crecimiento urbano y consolidación de la red urbana nacional.

Antequera (2007), en un reciente trabajo sobre el proceso de urbanización en Bolivia, destaca la existencia de una tricefalia urbana soportada en las ciudades de La Paz (y El Alto), Cochabamba y Santa Cruz, seguidas en su respectiva jerarquía por un grupo de 16 ciudades intermedias y al menos un centenar de ciudades pequeñas. Esta estructura, muy particu-



lar en Latinoamérica, ha resultado de un complejo programa de políticas del Estado Nacional, como la reforma agraria, la reforma urbana, la industrialización y la política de ocupación de oriente, todo lo cual aparece como respuesta ante la crisis de un modelo nacionalista, a lo que se debe agregar la implementación de una nueva política económica a partir de los 80 y el seguido ajuste estructural neoliberal de los 90, que fue común a escala global.

Dice el autor que "durante los últimos años estas ciudades concentraron la población, la inversión pública, la oferta de bienes y servicios y la cooperación internacional". En el altiplano La Paz concentra no solo la mayor parte de la burocracia estatal, el empleo urbano, la industria básica de alimentos, los servicios financieros y el sector terciario urbano, sino el 71% de la población urbana de la región.

En la mayor región de valles interandinos, Cochabamba alberga el 45% de la población urbana regional y hace de ciudad regional y enlace entre La Paz y Santa Cruz. Por su parte, Santa Cruz alberga el 60% de la población urbana del oriente del país y se ha "convertido en el polo

de desarrollo más importante del oriente boliviano y un punto de conexión con el Brasil".

Las 16 ciudades intermedias bolivianas albergaban ya en 2000 aproximadamente un millón y medio de habitantes, que representaban 18% de la población total del país.

Ciudades intermedias como Trinidad, Oruro, Potosí, Tarija y Sucre, capitales departamentales, junto a otras de menor jerarquía como Patacamaya, Guayaramerín, Riberalta, Yacuiba, Bermejo, Tupiza, Villazón, Montero, Quillacollo, Sacaba y Llallagua, entre otras, han construido su propia dinámica y se localizan en sectores estratégicos de frontera internacional y, consecuentemente, en centros de atracción poblacional importantes.

En los territorios en los que se localizan las ciudades intermedias y pequeñas, en las que como se dijo habitaban en 2 millones y medio de habitantes, residían también tres millones de pobladores rurales dispersos.

Solamente durante el Siglo XX, según el autor, la población urbana ha crecido 24



veces y concentraba en 2007 el 67% de la población total del país.

"El crecimiento urbano no ha sido uniforme en Bolivia. En las tierras altas, con la caída de la actividad minera, la importancia de la población urbana ha decrecido en un 21 % durante la segunda mitad del siglo XX. En la zona oriental de Bolivia ha habido un crecimiento demográfico acelerado, que pasó de albergar del 12 % del total de la población en 1900 al 32 % el año 2000. Es en esta región que reside más del 25 % de la población urbana del país. En la segunda mitad del siglo XX, se ha registrado un rápido crecimiento anual de alrededor del 4 % con un proceso de concentración urbana de más de tres cuartos de la población boliviana en ocho ciudades de más de 100.000 habitantes. En este proceso, la migración interna ha tenido un importante impacto pues generó un proceso acelerado de redistribución territorial y especialmente un crecimiento urbano concentrado en pocas ciudades (Ledo 2002:53, citado por Antequera, 2007)".

Tal proceso migratorio intranacional ha tenido ocurrencia sobre las áreas urbanas asociadas a los enclaves mineros centra-

les hacia el oriente. La articulación del mercado nacional durante la primera mitad del Siglo XX estuvo muy vinculada a la minería y explica la concentración urbana en el occidente del país, aunque más de la mitad de la población era rural todavía. Entonces la red de ciudades estaba dominada por La Paz, Oruro y Potosí, pero ya Cochabamba era, después de La Paz, la segunda ciudad en importancia del país, pero igualmente vinculada con servicios a la minería.

Con la emersión de las propuestas populistas de la década de los 50 se generó, según el autor, una modificación de los patrones de urbanización y de distribución espacial de la población boliviana, cuyos impactos resultarían claramente visibles a partir de los 80, pero particularmente durante los 90. La relación rural-urbana se revirtió y la población urbana alcanzó una participación del 64% sobre el total nacional al comenzar el Siglo XX.

El estancamiento demográfico, generado por la consecuente caída de las economías mineras en occidente, que resultó en la disminución del crecimiento o pérdida de población de las ciudades, contrasta con el crecimiento del proceso de



urbanización en oriente, asociada a la construcción de carreteras y la ampliación de la frontera de colonización sobre la amazonia, además de la fragmentación de la propiedad rural en los valles interandinos, que fue reforzada por una colonización tardía de la "zona tropical de Cochabamba".

El autor advierte que en las dos próximas décadas las tres áreas metropolitanas llegarán a concentrar al menos dos tercios de la población boliviana; si bien esta situación previsible claramente hoy, no cuenta con claras políticas urbanas ni demográficas.

Así se observa que mientras el ingreso per cápita es mayor en su orden en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en sus áreas periféricas se localizan pobladores en extrema pobreza, siendo la población indígena la más afectada. Para el autor, "este hecho muestra que la segregación económica y cultural son elementos del incremento de la miseria y la exclusión".

Migración y urbanización

Durante la década del 70, dice el autor, aproximadamente el 15% de la pobla-

ción boliviana había migrado al menos una vez en su vida, pero esta proporción ascendió a más de un tercio de la población total al comenzar la década de los 80, explicando igualmente dos tercios del crecimiento demográfico de algunas regiones.

El shock demográfico es atribuido a las transformaciones estructurales promovidas a partir de los 50, pero se agudiza con la crisis de la minería y el despido de más de 20.000 trabajadores mineros. "Entre 1987 y 1992 más de cien mil personas salieron de las regiones mineras del occidente boliviano. Muchos pueblos y ciudades vieron desaparecer a su población hasta el punto de convertirse en pueblos fantasma. Cuatro de cada diez migrantes se establecieron en las ciudades del corredor (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), mientras que otros se trasladaron a la región del Chapare u otras zonas rurales, y menos de un quinto se estableció en ciudades intermedias.

Estos flujos migratorios, que transformaron la estructura espacial poblacional le imprimieron el desequilibrio que hoy ésta muestra. De los inmigrantes del altiplano un 45% llegó a la Paz y el 17% hacia



las ciudades de su área de influencia; de los inmigrantes de Santa Cruz, esta ciudad recibió un 40% y un 33% se asentó en áreas rurales. En contraste sobre los valles un tercio optó por ir hacia áreas rurales; una cuarta parte se quedó en la capital y otro tanto en las ciudades intermedias. En la provincia de Cochabamba más de la mitad de los inmigrantes llegó del altiplano, reforzando su carácter altiplánico, según el autor. Caso contrario se dio en Santa Cruz, pues la mayoría de sus inmigrantes proceden de las tierras bajas y solo una cuarta parte del altiplano. En el altiplano la migración rural urbana afecta sobre todo a la ciudad de El Alto, pero también hay flujos de emigración hacia Cochabamba.

En su interesante trabajo, el autor concluye que tanto la urbanización como la dinámica demográfica, expresada en un patrón socio espacial, están determinadas por las "acciones directas de política económica y/o la aparición de posibilidades de empleo". Un primer momento está relacionado con la consolidada primacía de La Paz, que ya para 1950 había recibido importantes flujos migratorios; el segundo momento está relacionado con procesos de colonización tardía de la década

de los 60, impactando el eje San Julián (Santa Cruz)-El Chapare (Cochabamba)-Beni-La Paz; el tercer momento se dio entre 1950-1980 con el impulso y desarrollo de la agricultura comercial tecnificada y la gran y mediana industria agroindustrial del oriente; el cuarto momento obedece a la emigración internacional a la Argentina y Estados Unidos, desde la década de los 70; y el último momento y presente aún, se inició a mediados de los 80, por cuenta de los ajustes estructurales "y la relocalización que provocó la migración hacia las ciudades del Corredor y hacia el Chapare por el atractivo de la producción de la coca", aunque durante los 90 la migración hacia las tres principales ciudades continuó creciendo, pero a expensas de población de ciudades intermedias como Potosí, Oruro y de sectores periféricos de La Paz que migraron hacia Santa Cruz y Cochabamba.

Ledo (2002:69, citado por Antequera) concluye que "factores como la ampliación de la frontera agrícola, el desarrollo de la industria ganadera, la crisis de la economía minera, el estancamiento de la industria urbana, las actividades relacionadas con la producción y comercialización de coca, la apertura de vías de



comunicación en el oriente boliviano, los proyectos de integración energética con Brasil hacen prever que los flujos migratorios hacia el oriente y el trópico se incrementarán en los próximos años (Ledo 2002:69).

El itinerario más reciente del conflicto autonómico regional

Como se ha indicado antes, el conflicto por la autonomía regional en Bolivia no es un asunto instaurado por Evo Morales, como presidente. Se trata de un problema recurrente en el ejercicio del poder en Bolivia durante por lo menos los últimos veinte años.

Según Antequera (2007), una idea anticentralista se ha mantenido latente en la historia política boliviana al menos desde comienzos del siglo XIX, cuando nace precisamente en Santa Cruz un movimiento de tal naturaleza que plantea la necesidad de un Estado Federalista. A finales de dicho siglo y comienzos del XX tuvo ocurrencia la llamada Revolución Federal, en la cual el Partido Liberal de La Paz enarboló la bandera federalista en oposición al centralismo impuesto por Sucre. En la segunda mitad del Siglo XX,

después de la Guerra del Chaco y hasta los levantamientos de 1952 toma fuerza - por la fuerza- un movimiento nacionalista que pugna por la integración nacional de las diferentes regiones.

Pero nuevamente las élites de Santa Cruz, apoyadas en el Comité Cívico, durante la década de los 60 impugnan el centralismo, alegando que pese a ser los productores mayores de petróleo los recursos generados iban al control de La Paz. Este movimiento gana en negociaciones que un 11% de las regalías petroleras se quedé en el Departamento, dando soporte así a su crecimiento económico, pero al mismo tiempo dando razón a sus líderes.

Ante la persistencia de los ánimos anticentralistas, avivados con la llegada al gobierno de Jaime Paz Zamora en los 90, se crean más comités cívicos regionales, enarbolando ahora como bandera política no solo la descentralización política administrativa sino la elección directa de las autoridades regionales y locales, a lo que sectores del bloque dominante responden con una contrapropuesta de descentralización municipalista que no incluye la reclamada autonomía de los departamentos. "En el año 1993, el



gobierno de Sánchez de Lozada, propone una descentralización administrativa, pero no política, pues se teme que eso lleve a una desintegración nacional, y empieza a hablarse de la Participación Popular (Cedib 2004)".

La eclosión anticentralista se había desatado ya desde 1985 con las medidas neoliberales del gobierno de Víctor Paz Estensoro, asesorado por el Banco Mundial. En respuesta a la agudización de la crisis social generada por las medidas de ajuste estructural del Estado, la crisis de la minería y el achicamiento del aparato estatal y las garantías sindicales y laborales, se responde, como en todos los países bajo el influjo del modelo, con la creación de fondos para la atención focalizada de los pobres, los indígenas y la problemática ambiental, buscando de esta manera no solo paliar la crisis sino evitar conflictos sociales de mayor proporción. Ya para 1993 se habían privatizado las empresas públicas y la seguridad social, pero se promulga la Ley de Participación Popular, en 1994 (a propósito en el mismo tiempo en que en Colombia por ejemplo se promulgan las leyes 134 de Participación Comunitaria; la Ley 115 de Educación, entre otras), con la cual el gobierno

busca dar respuesta retórica a las crecientes demandas autonómicas de Santa Cruz y otros departamentos del oriente boliviano.

Con la citada Ley el gobierno nacional lejos de desconcentrar, re-centralizó el manejo del presupuesto nacional, manteniendo su determinación sobre el 75% del mismo, dejando un 5% a las universidades y el 20% restante a los municipios, con base en criterios de volumen de población, con lo que la brecha entre municipios de mayor y menor tamaño lejos de disminuir se acrecienta, pero en igual proporción se abandona a los sectores rurales a una peor suerte.

La Ley de Participación Popular tiene un efecto particularmente fuerte para la consolidación de la estructura urbana del país, pues se centran en la productividad urbana, la protección ambiental y la mitigación de la pobreza. Para ello se determinan cuatro políticas a saber: "a) la habitabilidad que propone que las ciudades proporcionen una calidad de vida aceptable para todos; b) la competitividad en términos de crecimiento del empleo, los ingresos y la inversión; c) el buen gobierno y administración que



implica la inclusión y representación de todos los grupos sociales en la sociedad urbana y c) la confiabilidad financiera que postula que las ciudades deben ser financieramente seguras y estables para los inversores privados (Fernández, 2002, citado por Antequera, 2007)".

Pero a diferencia del texto de las políticas, argumenta el autor: "en conclusión, las políticas económicas han incidido en la reducción de las políticas sociales. ...en las ciudades los derechos sociales, tales como la provisión de servicios básicos han quedado en manos privadas, los ciudadanos así se han convertido en "consumidores" de los mismos, y quienes no tienen recursos suficientes no pueden acceder a estos servicios. Las políticas de reducción de la pobreza o de mejoramiento de barrios sólo incide en las consecuencias y no en las causas estructurales de la pobreza, por lo que sus resultados son magros, puesto que a medida que crecen las ciudades la pobreza se hace más aguda y los problemas mayores".

Un episodio de este proceso empieza a adquirir magnitud nacional desde comienzos del año 2006, antes que se produjera como hecho inobjetable el triunfo elec-

toral de Evo Morales. Así aparece en el enunciado de la Agencia Boliviana de Noticias³:

Prosigue huelga regional y otros conflictos en Bolivia

La Paz, 06 Mayo. ABN.- La sureña región boliviana de Tarija entró en segunda jornada de paro general con amenazas de radicalizar las protestas, en medio de una serie de conflictos sociales y anuncios de nuevas movilizaciones, reporta Prensa Latina. La ciudad sureña, ubicada a 920 kilómetros al sur de La Paz, está totalmente paralizada, al igual que su región inmediata, mientras activistas de la protesta bloquearon la carretera a la ciudad de Potosí, principal ruta a la capital.

"También cerraron las demás salidas viales y el aeropuerto, por lo que se suspendieron operaciones de las dos aerolíneas que operan en Tarija", indicó telefónicamente desde esa ciudad el diputado Johnny Torres. La protesta demanda que las oficinas centrales de la empresa estatal de hidrocarburos sean trasladadas de La Paz

³ El texto se publicó en <http://spanish.vheadline.com/readnews.asp?id=33317>. Viernes, 06 de mayo de 2005. Artículo por: Agencia Boliviana de Noticias.



a Tarija, capital de la principal región gasífera de Bolivia, pero la nueva ley del rubro, aprobada la noche de este jueves, no tomó en cuenta ese reclamo. El Comité Cívico de Tarija informó que la huelga exige igualmente la construcción de una carretera a Paraguay y la renuncia del prefecto (gobernador) lugareño, Jaime Amézaga.

Entretanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) inició consultas con las organizaciones sociales, decididas a emprender manifestaciones contra la controvertida ley de hidrocarburos recién aprobada tras un confuso y accidentado debate parlamentario.

En la jornada precedente, La Paz fue por otra parte, escenario de manifestaciones de trabajadores de salud en paro de 24 horas, sindicalistas mineros que reclamaban y consiguieron la renuncia del presidente de la empresa estatal del sector y comerciantes informales que protestaban por temas tributarios.

Entretanto, el Comité Cívico de la región oriental de Santa Cruz confirmó que analiza la posibilidad de convocar unilateralmente un referendo sobre la autonomía de esa zona del país, si el congreso no lo hace,

en cumplimiento de un petitorio de 300 mil ciudadanos cruceños. Mientras, un bloque de organizaciones indígenas denunció que la demanda es una maniobra divisionista de la oligarquía cruceña, el presidente Carlos Mesa, en una breve visita a Santa Cruz, emplazó este jueves al congreso a atender la exigencia y convocar el referendo.

El 8 de julio de 2007, luego de las tensas jornadas de votación por los referéndum autonómicos impulsadas por el movimiento opositor en toda Bolivia, el diario El Deber (2007) titulaba que "El tema autonómico puede desatar conflictos regionales", en clara alusión a las experiencias internacionales en las cuales "es difícil lograr acuerdos y que también han tenido momentos violentos, como los que está viviendo Bolivia, pero hay que encontrar la salida".

Los líderes cruceños se muestran firmes en la lucha por las autonomías departamentales y están decididos a hacer cumplir

los resultados del referéndum. La misma posición tienen los departamentos donde ganó el sí. El Presidente cívico de Beni, Alberto Melgar, dijo que si la Asamblea no considera este tema, lo más probable es que vuelvan los conflictos regionales.



El ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo, dijo que los paros y las movilizaciones regionales son parte de la resistencia civil para avanzar en democracia. "Si el partido gobernante insiste en dejar a un lado el tema autonómico, lo único que va a conseguir es confrontación", señaló. El actual presidente cívico, Branko Marinkovic, lamentó que permanentemente se hubiera tergiversado el tema autonómico y haya sido motivo de enfrentamientos.

De igual forma, el prefecto del departamento, Rubén Costas, asegura que esta lucha continúa, porque ya se han dado todos los pasos legales y democráticos. Ahora se espera que la Constituyente la incluya en la nueva Carta Magna, caso contrario consideran que se buscará la forma de hacer cumplir la voluntad soberana del pueblo.

Esta misma fuente denuncia que la intención de la mayoría gobiernista de desconocer al movimiento autonómico ha provocado que

"el 8 de septiembre, cuatro regiones del país, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, cumplieron un paro contra la decisión del MAS de aprobar por mayoría absoluta de

los votos el reglamento de debate de la Asamblea Constituyente y los artículos de la nueva Constitución. Los departamentos pedían que se respeten los dos tercios. Los movimientos campesinos afines al partido de Gobierno amenazaron con cercar el departamento cruceño durante la realización de la Fexpo. El presidente, Evo Morales, no fue invitado a la inauguración de este evento".

Vila del Prado (2006:4), expresa refiriéndose al conflicto boliviano:

La apelación a lo étnico - cultural y a la lucha contra el centralismo tienen como respuesta la lealtad de aproximadamente la mitad de la ciudadanía de la región. Esto, que es su máxima fortaleza, impide que la élite ejerza la hegemonía a nivel nacional. Recordemos que la hegemonía requiere la incorporación al propio proyecto de algunas de las demandas máspreciadas de algunos de los grupos de las demás regiones, principalmente de los subordinados. Para eso tiene que conocerlos, vale decir ir más allá de su actual horizonte de visibilidad que sólo llega a las fronteras del

es-

pacio regional. En ningún caso es algo que pueda obtenerse simplemente con operativos de prensa.



Los Movimientos Sociales (MS) se hicieron visibles a través de marchas, bloqueos de calles y caminos, y otras formas de protesta. En aquellos momentos en que sus acciones alcanzan un punto alto, surge casi siempre como correlato y contrapeso, sin relación aparente, una fuerte demanda del movimiento regionalista. En estas situaciones, el gobierno nacional (y la élite LP) ven como se abren dos líneas de conflicto, a izquierda y derecha, lo que lo obliga a negociar con ambas fuerzas a la vez - sobre diferentes temas- en situación de extrema debilidad. Además, las principales decisiones están acotadas por un campo de restricciones impuesto por los organismos internacionales. De esto el gobierno tiene plena conciencia, pero no siempre ocurre lo mismo con los demás actores.

Las contradicciones entre ambas élites aparecen en el imaginario de los actores como conflictos entre sus respectivas sociedades regionales o entre el centralismo y las regiones, o bien como un choque entre "civilizaciones" (es decir, etnias). Es evidente que hay intereses espacialmente diferenciados, pero algunas cuestiones son propias de las tensiones entre una de las partes (región - departa-

mento) y el todo (nación). Es un registro importante el hecho de que los jefes de los partidos "nacionales" guarden silencio frente a ciertos enfrentamientos entre las élites, cediendo la palabra a las grandes centrales empresarias. Además, en estas situaciones los diputados forman bloques por región (brigadas), al margen de las tiendas políticas a las que pertenecen y de la ideología que invocan.

Al aproximarse las elecciones, las fuerzas se ordenaron en una forma más "clásica". La divisoria principal pasó roturando o achicando los débiles partidos del centro, especialmente el que intentaban construir los alcaldes de las principales ciudades. Los sectores que siguen a las dos principales élites regionales se alinearon en torno a un gran partido "nacional" y se desplazó el conflicto interregional a un segundo plano para hacer un frente común ante populistas y radicales, hecho que arroja luz sobre la naturaleza profunda de los clivajes sociales.

Luego del triunfo electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) se abre la interrogante acerca de cómo se manifestarán las tensiones entre las nacionalidades:



"Según una definición clásica de Dahl, la agenda mínima de una transición combina medidas de liberación política con la apertura de canales para la participación pública. Obviamente, la agenda se complica cuando las demandas de participación democrática chocan con la reivindicación de derechos de grupo que tendrían su fundamento en vínculos étnicos. Tendencias a la *etnische Schließung*, al 'cierre étnico', del proceso democrático advierten sobre la eventualidad preocupante de una colisión de derechos colectivos con derechos individuales..." (Kraus, 1996: 74, citado por Vidal, 2006:4).

En el marco de una democracia liberal es aceptable que los grupos luchen por imponer su visión, pero respetando el derecho legítimo del adversario a expresar su posición.

Detrás de este amplio espectro se oculta la siniestra telaraña de las redes del narcotráfico.

Dada la muy desigual distribución del ingreso y de las tierras, el punto clave de la discusión es la propiedad pública de los recursos naturales (hidrocarburos, agua y tierra).

El autor destaca que la situación boliviana está caracterizada por tres aspectos críticos, a saber: El primero, relacionado con una modernización tecnológica fragmentaria y en la que además coexisten sectores modernos y tradicionales; el segundo relacionado con la pauperización generalizada que hace que la mayoría de la población tenga una percepción proclive al cambio, así "no tengan una idea totalmente clara de sus metas"; y tercero, que hay sectores, de élite por supuesto, que no están dispuestos a aceptar un escenario de igualdad de oportunidades económicas y educativas, promovidas por el gobierno nacional y las declaraciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Pero es cierto también que la recesión golpea tanto a los sectores medios como al empresariado dependiente de los créditos del sector financiero nacional e internacional. Vila del Prado agrega que "si bien la solidaridad de la familia ampliada amortigua estos golpes, la "privación relativa" que supone el deterioro del nivel de vida, en las regiones periféricas, los empuja hacia la adopción de posiciones extremas desde las cuales perciben al centralismo como la causa de todos los



males, o bien hacia la emigración. A esto debe agregarse la disonancia e insatisfacción que los cambios en la estructura socio-familiar causan en las mentalidades conservadoras. Estos cambios obedecen a la ya citada emigración, a pautas de comportamiento tomadas de los países más desarrollados y la modernización de un segmento importante del mercado laboral que exige competencias que van más allá de la posesión de un diploma o de la pertenencia a una familia tradicional"

En este escenario las élites regionales, conformadas por sectores económicos con poder político compiten por los recursos públicos pero también por la toma de decisiones, tratando de minar la capacidad del Estado central a favor de intereses particulares que cuestiona su desconocimiento de las realidades regionales. Por esta vía se induce un desgarramiento del tejido social, alimentado además por una creciente informalización de la economía, aunque se reconoce un aumento en la eficacia del Estado Nación para resolver las acumuladas necesidades básicas de la población.

Simultáneamente y con la imposición de un nuevo orden internacional, se aprecia un

notable crecimiento del sector exportador de materias primas provenientes del sector primario y el nacimiento de industrias intensivas en mano de obra.

El autor reconoce que ante este panorama "se recomponen pactos y alianzas entre fuerzas sociales que representan a las fracciones de la élite dominante sobre la base del incremento de los recursos fiscales procedentes de los hidrocarburos. Se fortalecen las prácticas clientelares. La estabilidad depende de pactos entre actores políticos que permitan una cierta redistribución de las rentas estatales. De no existir estos pactos, se acrecientan los riesgos asociados con la fragmentación y el conflicto".

Quizá en respuesta a esta última posibilidad "el gobierno nacional ha dado un paso importante creando los consejos pre-autonómico y pre-constituyente. Los mismos están integrados por personalidades (líderes indígenas, empresariales, gremiales, vecinales y científicos sociales). Estos fueron elegidos a título personal, sin tener en cuenta su representación partidaria o corporativa. La misión no del todo explícita de estos consejos es establecer una agenda temática y proponer



puntos de acuerdo acerca de la conformación de la futura Asamblea Constituyente".

Referencias

- Antequera, Durán Nelson (2007), La urbanización creciente. La Paz. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Villa Libre. Cuadernos de Estudios sociales urbanos. Número 1 - 2007.
- Carrón, Juan M. (1986), El proceso de urbanización en el Ecuador 1962-1974. En: El proceso de urbanización en el Ecuador. Del Siglo XVIII al Siglo XX. Antología. Quito. Centro de Investigaciones Ciudad. El Conejo. Ed. Fernando Carrión, compilador.
- Carrión, Fernando (1986), Evolución del espacio urbano ecuatoriano. En: El proceso de urbanización en el Ecuador. Del Siglo XVIII al Siglo XX. Antología. Quito. Centro de Investigaciones Ciudad. El Conejo. Ed. Fernando Carrión, compilador.
- De Riz, Liliana (1986), El proceso de urbanización en el Ecuador 1950-1962. En: El proceso de urbanización en el Ecuador. Del Siglo XVIII al Siglo XX. Antología. Quito. Centro de Investigaciones Ciudad. El Conejo. Ed. Fernando Carrión, compilador.
- El deber.Com.Bo (2007). El tema económico puede desatar conflictos regionales (online). Disponible en <http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-07-08/vernotanacional.php?id=1964>. Acceso 26 de agosto de 2011.
- Embajada de Bolivia (2011). Bolivia: mapas (online). Disponible en <http://www.embajadadebolivia.com.ar/turismo/mapas.htm>. Acceso 26 de agosto de 2011.
- Espinosa, Rico Miguel Antonio (1992), Crecimiento urbano de Ibagué. Bogotá. Programa de Maestría en Geografía. Convenio UPTC-IGAC. Tesis para optar al título de Magíster en Geografía.
- Larrea, Carlos (1986), Crecimiento urbano y dinámica de las ciudades intermedias en el Ecuador. 1950-1982. En: El proceso de urbanización en el Ecuador. Del Siglo XVIII al Siglo XX. Antología. Quito. Centro de Investigaciones Ciudad. El Conejo. Ed. Fernando Carrión, compilador.
- Ramirez, Gallegos Franklin (2000), Impugnación regional. Demanda autonómica e identidades regionales y nacionales en el Ecuador post firma de la paz. Quito. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Sede Ecuador. Maestría en Relaciones Internacionales con mención en globalización y desarrollo, convocatoria 1977-1999.
- Vila del Prado, Roberto (2006), El conflicto en la Bolivia contemporánea. Alternativas de solución. Prevención y resolución de conflictos. En: Revista Futuros. Año 2006. No. 15. Volumen 4. La Paz. http://www.revistafuturos.info/futuros15/conflicto_bolivia.htm

